



MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A- 97

Procedimiento: Verbal

Demandantes: René Alejandro Pérez Castro y/o

Demandados: Nicolás de Jesús Alzate Hoyos y/o

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 002 2018 00620 **02**

Procedencia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín

Decisión: Confirma decisión apelada

Medellín, ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante en contra del auto fechado el 22 de febrero de 2021, mediante el cual se negó el decreto de una prueba.

ANTECEDENTES

En la demanda que dio origen al presente proceso se pretende la declaración de simulación absoluta del contrato de compraventa protocolizado en la escritura pública 053 del 13 de enero de 2017 otorgada en la Notaría Sexta de Medellín, celebrado entre la Constructora Guayacanes S.A.S y Nicolás de Jesús Alzate Hoyos.

Además, de manera consecuencial, se pretende la "nulidad absoluta del acto de hipoteca" constituido a favor de Camilo Andrés Vélez Gutiérrez y Ana Carola Gutiérrez de Vélez.

DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante el auto recurrido, entre otras cosas, la *a-quo* resolvió

"(S)E NIEGA aquella referente a oficiar a la DIAN a fin de que aporte las declaraciones de renta de los señores Camilo Andrés Vélez Gutiérrez y Ana Carola Gutiérrez de Vélez, acreedores hipotecario; declaraciones de los años 2016, 2017, 2018 en especial 2018, lo mismo para el demandado Nicolás de Jesús Alzate y la Constructora Guayacanes S.A.S. (sic)

Lo anterior, por cuanto y de conformidad con el artículo 583 del Estatuto Tributario, que hace referencia a la reserva tributaria, lo que así fue confirmado en sentencia C-489 de 1985 de la Corte Constitucional; la reserva indicada en el canon tributario únicamente se puede levantar respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos, en caso de solicitud de un Juez Penal, y por expresa autorización del declarante.

Lo que no es aplicable al caso particular atendiendo la especialidad civil de esta Judicatura."(sic texto auto apelado)

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte demandante se alzó en su contra manifestando que la Juez pasaba por alto que *"la prueba no está sectorizada por jurisdicción, y puede, el juez, solicitar toda aquella que como medio valido, sea requerida por las partes, y estando facultado el juez, para levantar la reserva de dicho documento, pues no obstante disposición expresa del artículo 583 del Estatuto Tributario, respecto incluso del juez penal, dicha información puede ser relevante para este juicio"*.

Esa importancia de las declaraciones de renta de los señores Camilo Andrés Vélez Gutiérrez y Ana Carola Gutiérrez de Vélez, a juicio de la parte demandante, radica en que en estas se deben reflejar necesariamente las sumas de dinero que formaron parte del negocio demandado o, en su defecto, *"en los ingresos de los agiotistas"*, por lo que

"si el juez penal puede levantar la reserva el juez civil con mayor razón, pues el principio de libertad probatoria, y la el hecho de que la prueba no está sectorizada por jurisdicción, esto es que se puedan practicar unas y otras no dependiendo la especialidad del despacho que conozca la causa, no tiene asidero ni razón legal, que usted pida la prueba, y que sea la DIAN la que justifique si la entrega o no, es un medio más efectivo para la concreción del derecho de defensa, y el debido proceso, que en busca de la certeza y la verdad procesal, debe privilegiar el juez."

Finalmente, agregó un argumento comparativo consistente en que *"si dicho documento, solo puede ser pedido por el juez penal, no podría ser solicitado por los jueces de familia, cuando el deudor de alimentos no paga las cuotas o pide exoneración"* (citas del escrito de recurso)

CONSIDERACIONES PARA EL CASO CONCRETO

Sea lo primero advertir que el auto recurrido es efectivamente apelable, de conformidad con el preceptuado en el numeral 3º del artículo 321 del Código General del Proceso.

Ahora bien, para la Suscrita aparece patente que el reproche enarbolado en la apelación tiene un fundamento que va en completa contravía del orden legal. Concretamente, se basa en que *"no obstante disposición expresa del artículo 583 del Estatuto Tributario, respecto incluso del juez penal, dicha información puede ser relevante para este juicio"*, es decir, a pesar de que los apelantes identifican la norma que gobierna el asunto y la claridad de sus restricciones en cuanto a la reserva legal a que está sometida la declaración de renta, critican que la Juez no accediese a sus pedimentos probatorios por simple "utilidad", cuando realmente lo que conviene no siempre es legal, y lo cierto es que todo Juez está sometido al imperio de las normas.

El texto normativo por cuya virtud la Juez negó la prueba echada de menos por los demandantes es del siguiente tenor:

"(L)a información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las

declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Nacionales sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística.

En los procesos penales, podrá suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.”

Hecho resaltable de esa norma es que confía exclusivamente al Juez Penal la competencia para conocer la copia de las declaraciones tributarias, lo cual mereció que un ciudadano instaurara una demanda de constitucionalidad que la Corte resolvió en la sentencia C-489 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se resolvió sobre la tensión que existe entre el derecho a probar y la limitación del levantamiento de la reserva en estos casos sólo para causas penales, con apoyo en el siguiente razonamiento:

"(L)a Constitución consagra, en favor del Legislador, la facultad para regular la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados (C.P., art. 15). La mayor extensión de la regulación legal, significará para el derecho a la intimidad económica, un menor ámbito. El desarrollo de la anotada reserva, puede concretarse en un tratamiento integral de la materia, o en la progresiva inclusión de hipótesis en las que opere el levantamiento judicial de la reserva. De una o de otra manera, el balance entre el derecho a la intimidad económica y el derecho al debido proceso - en particular el derecho a solicitar, presentar y controvertir pruebas -, que explícita o implícitamente se haga en la ley, debe inspirarse en los principios y valores constitucionales. Desde luego, sin desconocer que, en punto a la reserva tributaria, la declaración de renta equivale a una confesión del contribuyente y que, por consiguiente, su indiscriminada supresión podría conducir a una situación de virtual autoincriminación (C.P., art. 33), lo mismo que al vaciamiento del núcleo esencial del derecho a la intimidad.”

Incluso, argumentos como los de la apelación según los cuales la limitación podría afectar derechos de los menores en los casos de fijación de cuota

alimentaria o similares, quedan desvirtuados por preceptos como el contenido en el artículo 104 de la ley 1098 de 2006 (Código del Menor) o el artículo 89 de la ley 488 de 1998, mediante los cuales, respectivamente, se facultó a los defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de policía para *"solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos"*, y obligó que para fines de control al lavado de activos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales remita *"a solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter tributario, aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus bases de datos"*.

Nótese que en ambos casos fue el legislador quien levantó la reserva legal para eventos específicos, precisamente como lo advirtió la corte desde la citada sentencia de constitucionalidad al considerar que

"(P)or vía de ilustración, la ley podrá optar por levantar el sigilo fiscal en las causas en las que se debata la existencia de una relación laboral o de una obligación alimentaria, en cuyo caso se restringe legítimamente el alcance del derecho a la intimidad económica. Al hacerlo, respecto de los procesos penales, no se ha renunciado a ordenar legislativamente el levantamiento de la reserva en otros procesos, lo que bien podrá decidirse en el futuro".

En idéntico sentido se han pronunciado otros Tribunales del país, para reafirmar que

"por regla general la declaración de renta goza de reserva legal, lo cual impide que se decrete como probanza en los procesos judiciales, sin perjuicio de la excepción de los procesos penales, según lo dispuesto en la norma en mención o, por ejemplo, en los procesos de fijación de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, tal como lo estipula el artículo 149 del Decreto 2737 de 1989.

Luego en este tipo de proceso judicial no es procedente solicitar a la DIAN que remita la declaración de renta del demandado, so pena de desconocer el derecho a la intimidad económica de aquél, regulado en

el artículo 15 de la Constitución Política y, en el caso, no está autorizado el levantamiento de la reserva legal”.¹

Por demás, tampoco puede obviarse que las propias normas procesales prevén la reserva documental que debe tener en cuenta a la hora de decretar pruebas, en razón de lo cual no es cierto que el Juez Civil tenga facultades omnímodas. Ejemplo de ello es el texto del artículo 275 del C.G.P, según el cual *"(A) petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, **salvo los casos de reserva legal**"* (negrillas fuera del texto original).

Y aunque las anteriores razones son suficientes para confirmar la providencia recurrida, no sobra recordar que toda prueba debe ser conducente, pertinente y útil, más las pruebas documentales echadas de menos por la parte demandante no cumplen con ninguno de esos requisitos esenciales que deben concurrir para el decreto probatorio, porque la declaración de renta, entre otros, debe contener:

"1. El formulario que para el efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales debidamente diligenciado.

2. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente.

3. La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables del impuesto sobre la renta y complementarios.

4. La liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios, incluidos el anticipo y las sanciones, cuando fuere del caso."

De modo que lo determinante para la base gravable en efecto son los ingresos, pero obviamente los ingresos **totales** del año fiscal inmediatamente anterior. Por tanto, dentro de las infinitas posibilidades de ingresos que puede

¹ Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia. *Providencia del 7 de diciembre de 2020*. M.P. Antonio Bohórquez Orduz.

reflejar la declaración de renta, resulta casi imposible determinar el precio obtenido por la venta de un inmueble o con ocasión de un contrato de mutuo, salvo pues un completo y complejo trabajo pericial que ahonde en documentos igualmente protegidos por reserva, tales como la información exógena o, en fin, que tampoco garantizan ningún resultado en caso de que se trate de negocios realizados con dinero en efectivo.

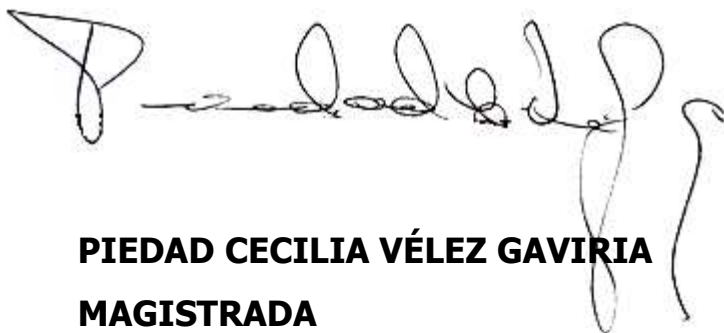
Sin más consideraciones, la Suscrita

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piedad Cecilia Vélez Gaviria', with a long, flowing tail extending to the right.

PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6b5f73cc2d01c8d4ffb4d28d64084f8543fa7ceec31b3cb97e2cb42f42d03473

Documento generado en 11/10/2021 04:48:18 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>